COCALEROS EN EL GOBIERNO: UN ENFOQUE CRÍTICO SOBRE EL COMPLEJO COCA-COCAÍNA EN LA BOLIVIA DEL SIGLO XXI

Franco Gamboa Rocabado[1]
Yale University, Connecticut - New Haven

Resumen.- Entre los conflictos sociales y políticos con que debe enfrentarse la democracia en Bolivia, las regiones productoras de hoja de coca representan un auténtico infierno para cualquier administración gubernamental. Detrás de la violencia con que reaccionan el gobierno estadounidense y los sindicatos cocaleros, se aproxima amenazante la sombra de una sociedad anómica. Desde el inicio de la erradicación forzosa de los cocales en 1990 hasta la llegada al gobierno de Evo Morales como dirigente cocalero, todo intento de negociación política y concertación social termina, por lo general, en represión, acciones instrumentales que refuerzan la producción de coca y dobles discursos, junto al aumento sigiloso del crimen que reproduce el narcotráfico. Actualmente, la promesa del nuevo gobierno de Morales para sacar al país del circuito coca-cocaína en un período corto no es otra cosa que una triste ilusión.

Mi intención en este ensayo es reflexionar sobre las diferentes lógicas contradictorias que van influenciando, tanto las acciones colectivas del movimiento cocalero, como los discursos represivos por parte de los Estados Unidos que solamente amplifica un escenario caótico de permanentes amenazas a la democracia, impidiendo el logro de soluciones legítimas para el complejo coca-cocaína.

Abstract.- Among all the social and political conflicts Bolivia's democracy face today, regions where coca plantations flourish represent a real trouble for any government. Behind the scenes of violence administered by the American U.S. government, and reactions coming from the coca growers' unions, the shadow of a society where anomy prevails is creeping.

From the beginning of forceful eradication of coca plantations in 1990 until President Evo Morales' election in 2005, attempts to reach political negotiation usually end up in repression, instrumental actions like counternarcotics policies that reinforce coca production, and double discourses along with the silent increase of crime that reproduces narcotrafficking.

Currently, all promises the administration of Evo Morales is offering, to pull the country out of the coca/cocaine circuit in the short run, represent no other thing than an opaque and sad illusion.

The purpose of this article is to analyze different and contradictory logics that influence collective actions from the coca growers' movement, as well as the repressive policies undertaken by the American U.S. government which only amplify chaotic circumstances of permanent threats to democracy, hindering the possibility to get legitimized solutions for the coca/cocaine circuit.

Palabras clave.- *movimientos sociales, producción de coca, narcotráfico en Bolivia, democracia representativa y conflictos de gobernabilidad en Bolivia, relaciones internacionales con Estados Unidos, guerra contra las drogas en la región andina.*

[1] Sociólogo político, especialista en gestión pública por London School of Economics and Political Science. Fue representante de las Naciones Unidas en la Asamblea Constituyente de Bolivia entre 2006 y 2007. Autor de los siguientes libros: *Itinerario de la esperanza y el desconcierto. Ensayos sobre política, sociedad y democracia en Bolivia*; *Buscando una oportunidad. Reflexiones abiertas sobre el futuro neoliberal*; *Los recorridos profanos del liderazgo*; y *¿Hacia la construcción de un nuevo orden democrático? Los resultados de las elecciones para la Asamblea Constituyente 2006*. Actualmente es investigador de Yale World Fellows Program, Connecticut, EEUU.

Introducción

Con el nombramiento y triunfo electoral de un presidente indígena como Evo Morales el 18 de diciembre del año 2005 – dirigente de las cinco federaciones del Trópico de Cochabamba, el área políticamente más fuerte de los productores de hoja de coca y del Movimiento Al Socialismo (MAS) –, el escenario democrático parecía anunciar varios referentes de cambio substancial en Bolivia, por ejemplo, el saneamiento y redistribución de tierras por medio de una estrategia que perfilaba una nueva reforma agraria en el siglo XXI, así como una serie de prestaciones sociales como la erradicación del analfabetismo, bonos educativos para evitar la deserción escolar y la reconversión industrial de los hidrocarburos, junto con las ventas masivas de gas natural a Brasil y Argentina a un precio más alto.

Así, en América Latina se pensó que era realmente posible transformar las estrategias de gobernabilidad con el propósito de ir más allá de pactos políticos entre los principales partidos con representación parlamentaria porque Evo Morales concentraba las demandas de un dominio indianista en los patrones socio-culturales para construir un socialismo indigenista o un nacionalismo populista con proyecciones andinas. De hecho Morales nacionalizó los hidrocarburos el primero de mayo de 2006, día del trabajo, mostrando el impulso de políticas centralizadas en el fortalecimiento del Estado, así como las ofertas de una Asamblea Constituyente para refundar la república bajo el estandarte de una mayor inclusión política de los movimientos indígenas que reclamaban la instauración de un Estado plurinacional. Sin embargo, varias preguntas siempre saltaron a la vista: ¿con los cocaleros en el gobierno, se podía transformar la política anti-drogas en América Latina? ¿Qué implica ser cocalero?

Los cocaleros controlan el Viceministerio de la Coca, consiguieron ungir como presidenta de la Asamblea Constituyente a Silvia Lazarte, dirigente cocalera de mucha influencia, en agosto de 2006 y el presidente Evo Morales fue ratificado como líder sindical indiscutible de las federaciones del Trópico de Cochabamba, accediendo a aumentar el número de *catos* por familia para la producción de coca. El *cato* constituye un derecho político y económico adquirido para producir libremente por lo menos una superficie de 500 metros cuadrados de coca.

Los parlamentarios cocaleros como Leonilda Zurita, senadora por Cochabamba, gozan de privilegios abiertos en la movilización de campesinos y articulan las principales estrategias con el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales que depende del Ministerio de la Presidencia, así como el mando principal de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB),

cuyo secretario ejecutivo, Isaac Ávalos es fiel aliado de los cocaleros, diputado suplente y su hermano, Saúl Ávalos llegó a ser asambleísta por Santa Cruz en el año 2006, presidente de la Comisión de Autonomías en la Asamblea durante 2007 y director ejecutivo de una de las comercializadoras de hidrocarburos nacionalizada, que hasta enero de 2008 estaba en manos de la empresa internacional Transredes.

El mundo cocalero exige analizar las orientaciones ideológicas, declaraciones políticas, acciones de hecho y el círculo que comienza en la coca y termina en la cocaína. Se trata, sin lugar a dudas, de intentar una reflexión realmente ontológica; es decir, comprender los patrones que construyen y refuerzan su identidad política, sus visiones de mundo y los alcances de su acción concreta en el circuito coca-cocaína. ¿Hasta dónde pueden llegar los cocaleros y cómo comprender la racionalidad de sus actuaciones?

La economía del narcotráfico, alimentada por la producción de coca excedente para luego generar pasta base y clorhidrato de cocaína que se exporta hacia el área andina y Estados Unidos, representa una constante amenaza para la modernización del sistema democrático en Bolivia puesto que involucra a un movimiento social: los campesinos productores de coca en el Chapare y los Yungas, movimiento capaz de bloquear al Estado y sus políticas públicas en materia de lucha antidrogas, afectando el tipo de relaciones internacionales entre Estados Unidos y Bolivia.

Si bien los productores de coca no reciben directamente los millones de dólares involucrados en el negocio ilícito del narcotráfico, la fuerza del número de familias dedicadas al cultivo en el Chapare cochabambino y los Yungas del departamento de La Paz, convirtieron a la pobreza campesina en un poderoso argumento para vincularse con el mercado de la coca, a expensas de un Estado nacional débil que fue incapaz de construir condiciones mínimas de desarrollo económico y establecer redes de protección social para romper los efectos perversos del circuito coca-cocaína. La ausencia de soberanía estatal en el fortalecimiento de la economía formal y lícita, condujo a miles de familias cocaleras hacia un laberinto que representa el rostro más humano del mundo de la coca, pero al mismo tiempo son la defensa de una economía subterránea del narcotráfico que tiñe la política y socava al Estado democrático.

Este ensayo reflexiona sobre cómo las regiones cocaleras se convirtieron en un callejón sin salida y una espiral cuyas complicaciones no tienen solución en el corto o mediano plazo. La razón fundamental se debe a que toda política anti-drogas en Bolivia ha sido decidida y orientada por el gobierno estadounidense de manera directa, casi incuestionable y sin dar lugar a la participación boliviana desde 1985. Así lo testimonian los acuerdos como: a) el Convenio del Programa Antinarcóticos del 24 de febrero de 1987; b) el Intercambio de Notas del 23 de diciembre de 1988 prolongando y enmendando el Convenio del Programa Antinarcóticos; c) el Anexo I, Proyecto de Interdicción, 23 de diciembre de 1988; d) el Anexo II, Proyecto de Reducción de la Coca y Desarrollo Alternativo, 23 de diciembre de 1988; e) el Acuerdo de Cartagena

de Indias del 15 de febrero de 1990; f) el Anexo III, Participación Ampliada de las Fuerzas Armadas de Bolivia en la Lucha contra el Narcotráfico; y g) la decisión del ex presidente Hugo Banzer, comprometiéndose a liquidar el complejo coca-cocaína en cinco años (1997-2002) con enormes costos a pagar para que los Estados Unidos permitieran que el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) del ex presidente Jaime Paz Zamora participe en la coalición de gobierno de Banzer denominada Acuerdo Patriótico en el año 1989, aún a pesar de que Paz Zamora estuviera comprometido en escándalos de narcotráfico al recibir dinero para solventar sus campañas políticas (Gamarra, 1994).

En realidad, Banzer y su partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) también estuvieron involucrados en el escándalo de los narco-vídeos en 1987 al conocerse cómo el diputado y hombre de confianza de Banzer, Alfredo Arce Carpio, tenía una estrecha relación de amistad con el narcotraficante Roberto Suárez Gómez. La gran pregunta es: ¿por qué los Estados Unidos son permisivos sabiendo que su política anti-narcóticos es destruida por otro tipo de racionalidades políticas? Una probable respuesta radica en los discursos y acciones represivas que los Estados Unidos logran viabilizar con gobiernos dóciles o conductas políticas ambivalentes para erradicar la coca, a costa de violar los derechos humanos y confundir el esclarecimiento de soluciones democráticas.

Las pautas de acción política y sociológica

Desde la firma del Anexo III entre Bolivia y Estados Unidos en 1991 para la participación ampliada de las Fuerzas Armadas en el programa de lucha antinarcóticos, se gestó un movimiento social de campesinos directamente ligados a la producción de coca. Aquel año adquirió preponderancia el Comité de Coordinación de las Cinco Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, organización que influye en el sindicalismo campesino y en las movilizaciones para denunciar la militarización de los cocales, rechazando cualquier intento de erradicación de cultivos; aquella coordinadora aún tiene como líder a Evo, formula el discurso del movimiento social, define sus estrategias y negocia su posición con el Estado.

La resistencia del movimiento cocalero frente a todo intento por erradicar sus cultivos excedentes combina hábilmente las demandas por infraestructura caminera, servicios de educación, salud, privilegios y favores sin aportar nada para diseñar una política antinarcóticos. En el fondo, tampoco no les interesa bolivianizar la lucha contra el narcotráfico pues son un movimiento organizado alrededor de la lógica del mercado, es decir, el aumento en la demanda de cocaína proveniente de Colombia, México y Estados Unidos, estimula la plantación de coca (aproximadamente, sólo 45 por ciento sería producción legal), convirtiéndose en un movimiento social que simboliza las luchas izquierdistas ligadas, simultáneamente, a un “incentivo ilegal-delictivo” que opera como un polo magnético para cohesionar dicho movimiento campesino.

Simultáneamente, el incentivo ilegal-delictivo tiene ramificaciones internacionales de carácter empresarial pero donde el movimiento cocalero no una tiene participación directa.

A pesar de tener un presidente como Evo Morales elegido en las urnas, el movimiento cocalero no busca su incorporación al sistema político democrático, ni tampoco intenta luchar por su modernización, sino que actúa con indiferencia aprovechando al máximo la indecisión y los errores de las políticas antidrogas para incrementar sus beneficios económicos. El incremento de coca es monitoreado por la embajada de los Estados Unidos y por el Ministerio de Gobierno en Bolivia, pero los beneficios directos vienen de dos fuentes: del mercado de la coca y de las políticas de desarrollo alternativo donde los cocaleros logran obtener financiamiento externo para proyectos concretos de corte productivo, políticas de salud, educación e infraestructura caminera.

El movimiento cocalero se robustece en la medida en que el Estado democrático se marchita, dando lugar al nacimiento de un Estado "anómico". Esto es lo que actualmente está mostrando Evo Morales pues su gobierno va debilitando la democracia representativa al negar el pluralismo partidario que según él habría fracasado con el modelo neoliberal y la caída del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, mientras que los cocaleros concentran como nunca beneficios unilaterales por la desordenada producción de coca: la producción de toneladas métricas de coca aumentó de 32 mil en 2001 a 37 mil como cosecha potencial. Sobre el incremento del narcotráfico o la participación cocalera en el negocio ilícito no se dice ni se dirá una palabra. Si bien se puede investigar sin intimidación sobre las relaciones de algunos cocaleros con el narcotráfico, las actitudes son pragmáticas pues si alguien se arriesga al negocio ilícito corre sus propios riesgos, pero la organización y fortaleza sindical de las cinco federaciones del Trópico de Cochabamba y los Yungas debe mantenerse incólume como el eje de su supervivencia política de largo plazo.

El movimiento cocalero construye sus pautas de acción cuando es influenciado por la presión norteamericana que funciona como catalizador. Se entiende por catalizador al gobierno de los Estados Unidos y su política antidrogas en América Latina que ejerce una acción sobre la dinámica y composición del conflicto entre los cocaleros y el Estado boliviano (Cf. Barrios Morón, 1989). Este catalizador puede acelerar o retardar el desenlace y el curso de los conflictos sin sufrir él mismo una modificación, sobre todo en el periodo que va de 1985 a 2005, año de la victoria electoral de Evo Morales. Los cocaleros asumen el papel de abanderados de la soberanía, irradiando peligrosos sentimientos nacionalistas hacia la sociedad donde se confunde la bolivianidad agredida por el imperialismo gringo y la oscura economía del narcotráfico que favorece a los cocaleros, corrompe a los partidos y destruye el sistema judicial (Cf. Mansilla y Blanes, 1994).

La ambivalencia surge cuando los cocaleros deciden construir su instrumento político,

el MAS, como un derecho legítimo al calor de la democracia pero inviabilizando una política anti-drogas que liquide definitivamente las ramificaciones internacionales del narcotráfico en territorio boliviano. Muchos cocaleros afirman que "su producción de coca es inofensiva y si algún excedente va a parar al narcotráfico, eso es lío de otros, sobre todo de los pervertidos gringos"[2].

El movimiento social cocalero posee un profundo carácter conservador en sus patrones de comportamiento político, pues no busca inaugurar un momento histórico transformando el Estado boliviano, democratizando mucho más el sistema político o evocando una lucha para generar una identidad nacional original. La disciplina organizacional del sindicato es un rasgo que provoca orgullo en los cocaleros, razón por la cual su discurso como movimiento social se muestra hacia el exterior por medio de una gran efectividad en las luchas cuerpo a cuerpo y los bloqueos que constituyen acciones de resistencia; empero, el movimiento también contiene una estructura jerárquica en su interior muy vertical donde el liderazgo de Evo Morales es único y permanente, así como del resto de sus dirigentes de confianza.

Por el contrario, sus formas de organización están construidas sobre una concepción tradicional de la política donde imperan tres características: primero, la lógica del matar o morir, segundo, la imposición innegociable y tercero, la búsqueda de los máximos beneficios económicos para un sector restringido de la sociedad, que son ellos mismos, a expensas de los mínimos esfuerzos. El ejemplo más claro es que concentran el 40% del presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Rural desde enero de 2006 para proyectos ubicados solamente en el Chapare y los Yungas, alrededor de 100 millones de bolivianos junto con el financiamiento de organismos de cooperación internacional, aunque mostraron una alarmante incapacidad de gestión pública porque no pueden planificar racionalmente su producción cocalera, ni tampoco renunciar a los beneficios de la cooperación internacional frente a quien levantan la mano para pedir más dádivas, sin ofrecer una alternativa de cambio en sus visiones productivas de largo plazo. Saben muy bien que el hecho de mostrar rasgos apocalípticos los convierte en campesinos exitosos como para sitiar al Estado y forjar una férrea disciplina sindical, inclusive al costo de ejercer violencia simbólica y física sobre sus propias bases.

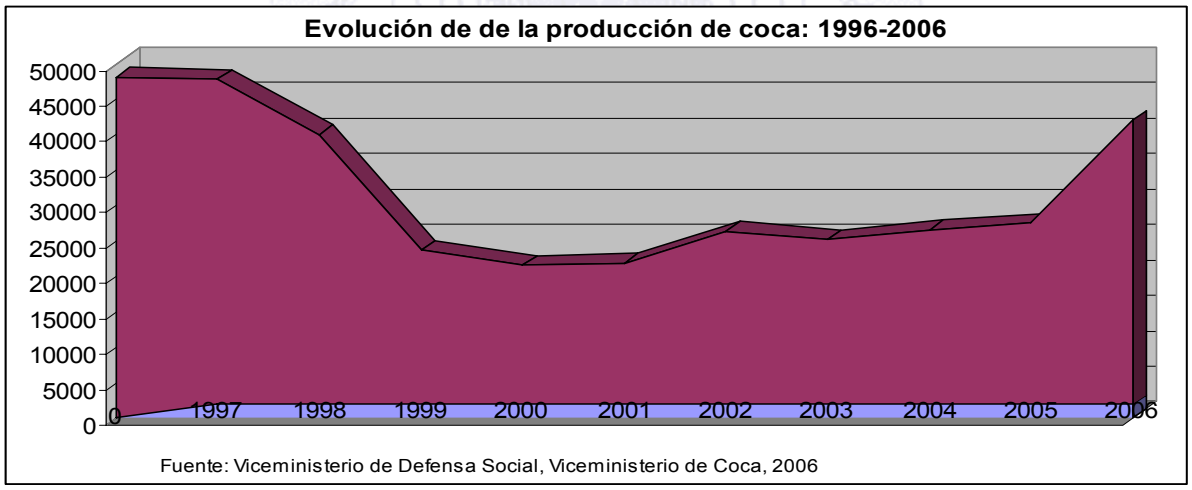
El objetivo es mantener un movimiento social pragmático de orientaciones unilaterales donde cualquier intento de erradicación de coca y sustitución de cultivos significaría iniciar la guerra del fin del mundo o una supuesta guerra civil en Bolivia, pero de signo localista ya que para los cocaleros el país comienza en el Chapare de Cochabamba y termina en los Yungas de La Paz.

La acción colectiva en el Chapare y los Yungas es un fenómeno que aparece como "resultado acumulado" a lo largo de veinticinco años considerando a más de 280 mil

[2] Testimonio de Rita, cocalera de los Yungas.

campesinos. La expansión de los cultivos aumenta constantemente desde 1980: de 30.646 hectáreas en 1987 a 44.462 en 1.990, llegando a un total de 48.100 hectáreas en 1994 aunque otras fuentes manejan la cifra de 47.200, empero, de acuerdo con las normas vigentes en la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Substancias Controladas, la producción excedente e ilegal alcanzaría a las 32.152 hectáreas de coca, cuando solamente están permitidas 12.000 para el abastecimiento del mercado interno (Quiroga, 1990).

Es muy probable que la región del Chapare haya aumentado sus cultivos de 40.613 hectáreas en 1986, a 70.403 en 1994. A esto se agrega que, aproximadamente, el 90 por ciento de la coca producida en el Chapare se destina a la fabricación de clorhidrato de cocaína, mientras que los cultivos de los Yungas – controlados también por la Ley 1008 – sirven más para satisfacer la demanda de consumo interno como mates, masticación de hojas, jarabes de coca y demás derivados industriales. Desde la llegada de Evo Morales y el MAS al gobierno el 20 de enero de 2006, se estima que la producción de hoja de coca subió a cerca de 80 mil hectáreas, aunque las cifras monitoreadas por el gobierno consideran que el incremento creció de 25.500 hectáreas en el año 2005 a 40.000 hasta el 12 de diciembre de 2006, momento en que el propio Evo Morales anunció públicamente que la Ley 1008 debía considerar legales, por lo menos a 20.000 hectáreas. Las razones de este compromiso descansan en un cálculo estrictamente político: consolidar al instrumento político (MAS-IPSP) y reforzar decididamente las lealtades para asegurar la defensa de las “políticas revolucionarias anti-neoliberales y anti-imperialistas”.



Fuente: Viceministerio de Defensa Social, Viceministerio de Coca, 2006

Los cocaleros son capaces de definirse a sí mismos como parte de una cultura milenaria que puede tomar decisiones autónomas sobre el complejo circuito de la coca y la cocaína. Definen también el campo de sus acciones; es decir, las relaciones con otros actores, disponibilidad de recursos, oportunidades y limitaciones, así como el espacio de lucha, no para destruir el sistema capitalista promoviendo la instauración de uno diferente, sino para aprovechar un campo de conflicto en el cual puedan conquistar adherentes, modificar estrategias, prever acciones del enemigo: la Fuerza

Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) del ejército y la DEA estadounidense. El propósito estratégico y final es proteger sus beneficios materiales de la economía cocalera.

El movimiento cocalero usufructúa las condiciones democráticas para protestar y defender su libertad de expresión, siempre y cuando sus intereses económicos respecto a la hoja de coca se mantengan intocables. En realidad es imposible distinguir qué federaciones o sindicatos cocaleros se relacionan con la producción legal y quiénes se benefician de la ilegal. Las decisiones se aplican para todo el Trópico de Cochabamba y los Yungas, incluyendo a los intermediarios que venden los tambores de coca. Si bien surgen enfrentamientos entre productores y comercializadores, el instrumento político es una estructura nacional que ampara a "todos".

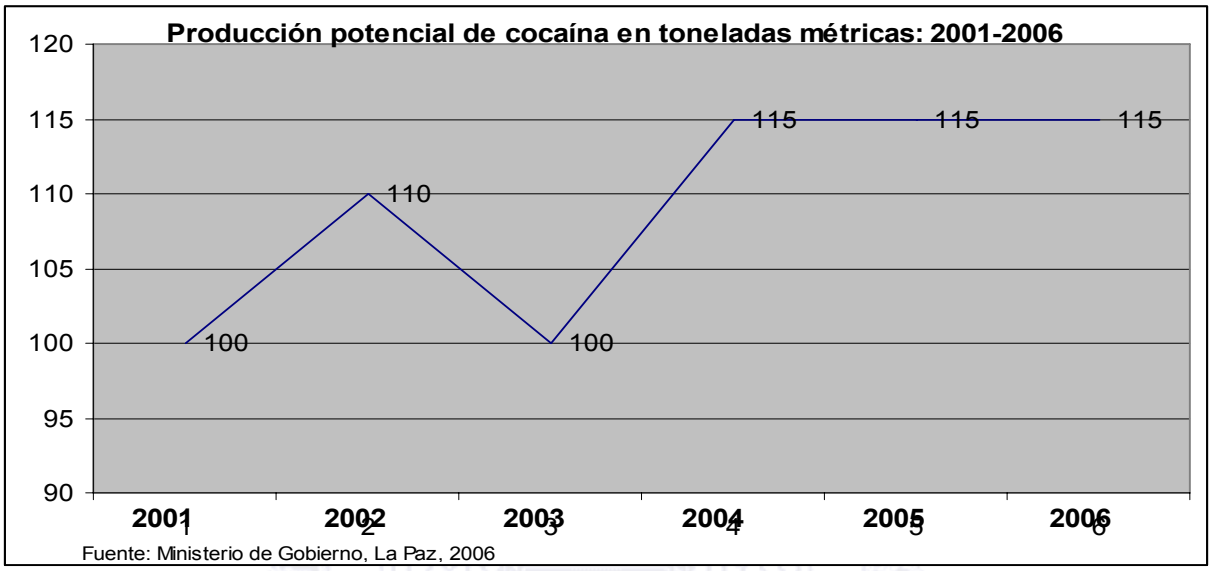
Los campesinos crean, efectivamente, un "nosotros colectivo" desarrollando dos clases de orientaciones: por un lado, aquellas relacionadas con los fines de su acción: la protección de todos los cultivos de coca, sean éstos legales, excedentes y las consecuencias ilegales conectadas con el narcotráfico. Aquí se entiende al narcotráfico como la variable económica que sirve de incentivo para producir la hoja de coca, corriendo una serie de riesgos pero para sobrevivir en medio de las tareas pendientes del Estado anómico y escapar de la pobreza rural.

Por otro lado, orientaciones relacionadas con los medios de su acción que van desde la negociación política hasta algunas reacciones destructivas como los bloqueos de carreteras y la embocada a los contingentes de soldados que erradican los cocales y los policías de la Unidad de Monitoreo y Patrullaje Rural (UMOPAR), acciones que nada tienen que ver con las teorías clásicas del marxismo, socialismo o el nacimiento de un Hombre Nuevo, aunque los dirigentes intermedios y el propio Evo Morales invocan al discurso socialista como alternativa al capitalismo y fortaleza frente al imperialismo estadounidense.

En todo caso, para los cocaleros mantener las cosas como están es mucho más ventajoso, mientras que la represión policial o militar constituye el caldo de cultivo para reproducirse como actores sociales al margen de la ley y la revolución. La violación a los derechos humanos con detenciones súbitas, muertes de bloqueadores por balas de uso militar y la misma desaparición de oficiales del ejército, convierten a las zonas cocaleras en áreas donde están ausentes la características del Estado de derecho.

La economía del narcotráfico en Bolivia tiene un peso definitivo, determinando el crecimiento exponencial de las plantaciones de hoja de coca y convirtiendo al circuito coca-cocaína en un verdadero torbellino de caos porque nadie sabe dónde están las salidas definitivas o cuáles son las soluciones estructurales. ¿Será posible intervenir, ya sea con un gobierno de izquierda o derecha, siendo que los actuales conflictos expresan, en realidad, una sociedad anómica que amenaza con obstaculizar los

potenciales de modernización con los cuales cuenta el sistema político democrático? No está claro si una segunda reforma agraria hará más productivos a los campesinos y convertirá a las zonas cocaleras en un tránsito hacia una verdadera reconversión económica. Muchos cocaleros ven en sus generaciones jóvenes, no a agricultores sino a ciudadanos modernos lejos del pasado campesino.



Fuente: Ministerio de Gobierno, La Paz, 2006

El circuito coca-cocaína tiende a desviar los *límites de compatibilidad* del orden social y político hacia pautas de conducta intransigentes, violencia política y situaciones de una verdadera anomia donde "lo estatal" se convierte en una referencia perversa para la visión de los campesinos, antes que en un procesador positivo de sus intereses y demandas (Cf. Waldmann, 2006). Como consecuencia no deseada, la producción de cocaína y las redes de narcotráfico tienden a ocupar un espacio de acción en el mercado negro del consumo con dimensiones transnacionales y el contrabando de estupefacientes (y sus derivados), generando distorsiones en las posibilidades de construcción de orden y control estatal que se ven socavadas permanentemente por la producción de coca.

Este tipo de conflicto va agravándose por la presión internacional que ejerce el gobierno estadounidense cuyas condiciones para la erradicación de los cocales tienen una influencia directa y multiplicadora en la economía boliviana, en las instituciones democráticas que se ven impedidas de hacer frente a tales condicionamientos, y en la esfera socio-cultural, porque un enfrentamiento abierto entre los campesinos y los gobiernos boliviano y estadounidense, polariza enormemente la opinión pública y la conciencia colectiva en todo el país.

El movimiento cocalero desarrolló una ideología de la coca que descansa en el discurso de la "hoja sagrada de los incas y patrimonio ancestral de Bolivia", construyendo sus códigos sobre la base de principios de una visión dual: a) por un

lado, la que contribuye a entender al país como un conjunto de nacionalidades originarias de aymaras, quechuas y etnias amazónicas que tienen el derecho histórico a plantar coca; b) por el otro, la visión en la que se detecta una amenaza occidental y alienante encarnada básicamente en la lucha antinarcóticos.

En el seno del sindicalismo campesino, y en gran parte de la población del área andina boliviana, la hoja de coca se convierte en una fuerza divina y paternal capaz de otorgar techo, comida y bebida, así como todo tipo de seguridad espiritual. Esta economía moral ha sido cultivada en los sindicatos campesinos del Chapare y los Yungas, así como al interior de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

El discurso de enfrentamiento que maneja el movimiento cocalero es utilizado para insuflar un conflicto que transmita a la sociedad cómo una nación oprimida (los cocaleros aymaras y quechuas) se enfrenta contra otra cultura dominante de corte extranjerizante y agresiva (el Estado democrático representativo y las presiones estadounidenses).

El origen del discurso de enfrentamiento radica en la "directa intervención extranjera" en las políticas de interdicción y control de cultivos de coca, pero sobre todo adquiere un tono muy dramático con los pronunciamientos públicos de algunos embajadores de Estados Unidos como Manuel Rocha, que en pleno proceso electoral del año 2002 abiertamente amenazó a Bolivia con el cierre del mercado energético de California para la venta de gas natural si la población votaba por el entonces candidato a la presidencia del MAS, Evo Morales.

Los objetivos en juego apuntan a que el movimiento cocalero postule su autonomía cultural y política para controlar su actividad económica en materia de producción de hoja de coca; cualquier negociación que cuestione aquello cae dentro de lo absurdo, pues para este discurso la cultura se defiende a sangre y fuego ya que todo intento por transigir con los opresores gringos significaría una actitud despreciable para endosar la cultura aymara-quechua. Una vez más, no hay diferencias entre los campesinos productores de zonas legales o ilegales, pues el discurso engloba a todos, la organización sindical moviliza a todos y la identificación con el derecho cultural al cultivo caracteriza al Chapare y los Yugas por igual.

El incentivo ilegal-delictivo del narcotráfico que estimula la producción excedente de cocales y cohesiona al movimiento campesino – es decir, la combinación entre demanda de materia prima para producir cocaína y la disposición de plantar coca – se lo encubre permanentemente ante la opinión pública y los medios de comunicación, exaltándose actitudes contradictorias de caos y delincuencia que pretenden despertar un nacionalismo acendrado. Los sindicatos utilizan un código interpelador como la pobreza campesina, cuyo objetivo es poner en marcha cierta lógica de víctimas y victimarios para despertar adhesiones emocionales.

Al revés de la medalla encontramos otro discurso encubridor que actúa negativamente durante los conflictos: el discurso internacional contra las drogas que posee un fuerte contenido geopolítico de dominación, pues ya no se establecen diferencias entre enfermos-consumidores de drogas y delincuentes-traficantes, sino entre países sufridos o inocentes y países culpables. El imperio del caos y las sociedades anómicas son el común denominador, frente a lo cual hay muy poco espacio para llevar adelante soluciones racionales, pues se presenta a los Estado Unidos como la víctima por excelencia, es decir, el blanco principal de los cocaleros y narcotraficantes del exterior.

La consecuencia inmediata de estos discursos ambiguos e instrumentales elaborados por los Estados Unidos y los cocaleros predetermina un conjunto de estereotipos para detectar dos fantasmas malévolos: la cocaína y el monstruo político-delictivo latinoamericano, destacándose a los campesinos productores de coca y a las mafias de los carteles narcotraficantes como el eje del mal en el ámbito internacional. Con estos estereotipos, el problema actual de las drogas en el continente se restringe a una sola droga: la cocaína y a un solo responsable: los países productores de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína (Wilson y Zambrano, 1994).

Para los campesinos del Chapare y los Yungas en Bolivia, aquella presión extranjera es un *medio* utilizado durante todo tipo de conflictos porque permitiría demostrar ante la conciencia colectiva boliviana que la producción de hoja de coca constituye un arma de resistencia cultural patriótica, de cohesión nacional, de autodeterminación política y bandera de defensa para los derechos humanos.

Las respuestas que los cocaleros y el Estado boliviano dan en medio del conflicto, van complejizando la naturaleza, contenido y tensión de las relaciones bilaterales entre Bolivia y Estados Unidos. Todo intento de solucionar el complejo coca-cocaína está destinado al fracaso mientras los actores sociales – tanto los Estados Unidos como los cocaleros – en juego no renuncien a ideologías encubridoras que levantan mucha neblina en medio de los problemas (Cf. Merrill, 1989).

El narcotráfico constituye un tema inamovible en la agenda de la política exterior boliviana. Sus relaciones con el sistema de partidos y las vinculaciones entre política, poder y tráfico de drogas representan también los ejes de discusión fundamentales a la hora de evaluar el desempeño político de la democracia en toda América Latina.

La posibilidad de ir más allá de las apariencias en las declaraciones oficiales sobre narco-política tropieza con cortinas de humo alrededor de los problemas que atingen al narcotráfico, escondiendo información o desarrollando estrategias tendenciosas para tergiversar los hechos y, por supuesto, llevándose a cabo acciones delincuenciales de terrorismo con el objetivo de encubrir a una serie de personajes.

Las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y la región andina se caracterizan

ante todo por el narcotráfico, razón por la cual podemos afirmar que los regímenes democráticos se mueven dentro del péndulo que gira entre la droga y las instituciones de la democracia, lo cual exige realizar un balance crítico sobre la evolución de las relaciones boliviano-estadounidenses, así como pensar el tinte político que adquiere la cooperación al desarrollo proveniente de USAID desde 1985.

Así destaca de manera cínica una interpretación del narcotráfico porque al analizar el patrón general de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos durante los últimos veinte años, surgen los perfiles de lo que podría denominarse una hipocresía abierta: "los privilegios y las manipulaciones son para mis amigos pero la aplicación de la ley y la pesada burocracia es para mis enemigos" (Gamarra, 1994: 189-218). Esto ilustra tanto el dilema boliviano de la lucha contra el narcotráfico, como las relaciones entre los Estados Unidos y Bolivia.

Todo el problema está teñido de múltiples contradicciones donde se observa que el éxito de la lucha contra las drogas es medido en términos de metas burocráticas de arbitraria interpretación, así como en función de una razón pragmática para buscar y seguir recibiendo mayor financiamiento destinado a la erradicación, el desarrollo alternativo y el fortalecimiento de la democracia que se convierte en una tergiversación pues nadie está plenamente al margen del autoritarismo en el circuito coca-cocaína.

En consecuencia, aparecen varios contextos importantes. En primer lugar, los Estados Unidos siguen siendo una potencia que está tratando de redefinir su política exterior después de la Guerra Fría con tres temas de agenda estratégica: la lucha global contra el terrorismo islámico, la integración económica en el hemisferio occidental y el combate a las drogas. En lo referido a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, obviamente la cuestión de drogas es lo trascendental junto con la ambigüedad con que se desenvuelven los gobiernos democráticos donde resurgió un espíritu anti-norteamericano fruto de los fracasos de las políticas económicas orientadas hacia el mercado y la aparición de liderazgos indigenistas y populistas como Evo Morales, Rafael Correa e inclusive el mismo Ollanta Humala en Perú, que a pesar de haber perdido las elecciones presidenciales todavía dejó una estela de seguidores anti-imperialistas.

La expresión cotidiana de "utilizar la ley sobre aquellos que son considerados enemigos", señala el hecho de que Estados Unidos continúa con una política de favoritismos hacia los países que cumplen con sus objetivos estratégicos, aplicando las leyes con drásticas sanciones para aquellas naciones o actores que ya no les son útiles, como el caso de Manuel Antonio Noriega en Panamá.

Entran en escena entonces los rostros ambiguos de la política exterior norteamericana: el ceño fruncido e iracundo hacia los líderes anti-estadounidenses donde destacan las condenas y actitudes intransigentes, pero al mismo tiempo el nacimiento de un tratamiento más flexible con sonrisas de benevolencia que

tranquilizan a presidentes como Álvaro Uribe que llevó hasta el extremo la aplicación del Plan Colombia de combate al narcotráfico y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Empero, el cinismo aparece nuevamente porque muchos liderazgos fieles a los Estados Unidos tienen serios indicios de haber vinculado sus campañas políticas con recursos económicos del narcotráfico.

Lo mismo puede decirse sobre el ex presidente de Bolivia Jaime Paz Zamora (que gobernó de 1989 a 1993) donde los Estados Unidos ya tenían información relacionando a éste y su partido, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) con la narco-política desde 1987. Estas peligrosas relaciones económicas se extienden también hacia Acción Democrática Nacionalista (ADN) del desaparecido Hugo Bánzer Suárez y el histórico Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Los "narco-vínculos" caracterizan a las formas de hacer política en tiempos de democracia.

En el caso de Jaime Paz, los Estados Unidos no intervinieron temprano en 1989 después de su elección como presidente de Bolivia porque posiblemente si se vetaba a Paz Zamora existía el riesgo de desestabilizar la joven democracia boliviana, razón por la que el Departamento de Estado decidió no involucrarse dejando que el agua siguiera su curso pues la información que se dio a conocer en 1994 sobre las relaciones del MIR y el narcotraficante Edgar "Oso" Chavarría era exactamente la misma que los Estados Unidos ya manejaban en 1987; además, Bolivia también ya conocía el escándalo de los narco-vídeos, por lo que el conflicto no significaba nada nuevo. Tal vez, si Estados Unidos no influyó en 1989 fue debido a una decisión estratégica de no traumatizar la débil democracia boliviana. Jaime Paz llevó adelante la política denominada "diplomacia de la coca" donde trató de convencer a la comunidad internacional que la hoja de coca no era de hecho cocaína, además de nombrar comandantes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) a ex militares cuestionados por la embajada americana como Faustino Rico Toro.

Siguiendo esta lógica, ¿puede pensarse que el veto y el intento de juicio a Jaime Paz en 1994 fue un ajuste de cuentas a la salida del palacio de gobierno, y que otro escándalo denominado "narco-avión" con cuatro toneladas y media de cocaína durante la gestión del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997, fue perdonado por los Estados Unidos debido a otra decisión, también estratégica?

Estas actitudes de injerencia por parte de los Estados Unidos evidencian el rotundo fracaso de la guerra contra las drogas en Bolivia, junto a una hábil destreza para dejar intactos a varios jerarcas del Estado. A pesar de los sucesos con el narco-avión, el Ministro de Gobierno de entonces, Carlos Sánchez Berzaín pudo conseguir un buen soporte para la balanza de pagos y la lucha antidrogas boliviana en de 1994 a 1997.

Los Estados Unidos fueron también muy exigentes y rígidos con las dos gestiones de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), a tal punto que muchos especialistas del Departamento de Estado americano consideraban que

Sánchez de Lozada no estaba haciendo lo suficiente en relación con el narcotráfico. Entre 1993 y 1994 Estados Unidos por poco descertifica a Bolivia pues no estaba cumpliendo con una serie de metas en la erradicación de cultivos de coca. De pronto aparece un resultado. El gobierno de Sánchez de Lozada cumple con algo que ninguna otra administración había conseguido: logra que en el Chapare se transite de manera drástica de la erradicación voluntaria a la erradicación forzosa con mayores dosis de violencia. Todo esto sobre la base de la presión en el asesoramiento estadounidense.

Los objetivos básicos sobre la Ley 1008 de substancias controladas se cumplieron gracias a las gestiones bilaterales del embajador Robert Gelbard quien impuso a Sánchez de Lozada la erradicación violenta a partir de junio de 1994. Por lo tanto la relación con los Estados Unidos cambia cualitativamente naciendo una suerte de "equilibrios por interés" junto a la identificación clara del enemigo: los campesinos cocaleros y los narcotraficantes.

Los gobiernos bolivianos deciden de manera estrictamente política entre 1994 y el año 2002 satisfacer las expectativas del Departamento de Estado y enjuiciar al MIR a partir de pruebas importantes presentadas por la embajada americana contra Jaime Paz. Lo que sí está en discusión hasta el día de hoy es hasta qué punto las supuestas evidencias sobre narco-política eran judicialmente razonables porque si lo que parecía representar pruebas hubiera sido presentado ante los tribunales estadounidenses, solamente podía hablarse de "evidencias circunstanciales". El ex presidente Paz Zamora fue cuestionado por una decisión política que buscaba destruir todo vestigio de su diplomacia de la coca y entorpecer su retorno democrático en las elecciones de 1997 y 2002.

En Bolivia y en muchos países de América Latina existe otro hecho concreto: no poder determinar los orígenes de varias fortunas. Se respira en el ambiente una cultura de la tolerancia hacia la corrupción vinculada con el narcotráfico. Posiblemente el tráfico de drogas en sí mismo no desestabiliza la democracia, pero sí una cultura de la impunidad y condescendencia hacia los que actúan como insignes y solemnes pícaros. Los rostros ambiguos e hipócritas celebran, en medio de esta cultura, su entronización.

El consumo suntuario y los placeres más grandes ligados al poder y el dinero fácil aplastan toda honestidad, constituyendo el atractivo modo de vida que muchos acarician con voluntad indecorosa. El hecho que nadie pregunte por qué aquel político o este dirigente sindical se hacen ricos de la noche a la mañana es un dato llamativo que no se puede pasar por alto en el análisis de la cultura de la impunidad respecto al narcotráfico.

El circuito coca-cocaína penetró en la sociedad boliviana y el sistema político de manera contundente. Se lo observa cada día y cuando lo sabemos como parte de

nuestra cotidianidad lo toleramos habitando en una cultura donde interesa más quién tiene mercancías suntuarias que la moral y un sentido de responsabilidad pública. Al mismo tiempo estamos dispuestos a moralizar lo que hacen y no hacen los Estados Unidos en su vida diaria respecto al consumo de drogas.

Bolivia ya no es solamente productora de coca sino que tiene redes y organizaciones de narcotraficantes bien estructuradas con capacidad de influir en el mercado internacional, posiblemente sin intermediarios. Muchos narcotraficantes bolivianos como lo evidenció Luis Amado Pacheco, alias "techo de paja", no son subordinados del narcotráfico colombiano, sino forjadores autónomos del negocio ilícito con importantes terminales en las esferas del poder político.

Es plenamente verosímil pensar que la relación entre la democracia y la droga no es de conflicto, sino más bien de "mutua convivencia" no necesariamente negativa, pues es sabido que el narcotráfico representa una fuente adicional de ingresos en dólares para la economía, evitando que ésta se torne inmanejable y afecte seriamente algunas cuerdas de la estabilidad democrática.

La impostura es en parte la naturaleza del sistema democrático, ya que la lógica política de un régimen democrático muestra que los actores buscan preservar sus cuotas de poder en su ingreso al Parlamento, acceso a ciertos fueros y prerrogativas. Esto se vincula con una observación mucho más amplia sobre las relaciones entre la democracia y la droga: América Latina está siguiendo las huellas estadounidenses de democracia donde el dinero y los factores electorales son lo más importante.

¿Quiénes pueden proporcionar la danza de los huevos de oro para las campañas políticas? La consecuencia inmediata de este problema es incluso un dilema muy serio para los Estados Unidos: asumir la posición moralista de condena absoluta, o poner en marcha los juegos estratégicos con pragmatismo. El discurso moralista es para estampar los apretones de manos ante las cámaras de televisión y los periódicos, mientras siguen adelante los acuerdos con aquellos países con quienes conviene la integración comercial, junto a la absolución de los escándalos sobre narco-política.

El antídoto para desenmascarar este juego de muchos rostros de complicidad y estrategias de asechanza, podría ser el fortalecimiento de esferas públicas para que sea la ciudadanía quien conozca, discuta y juzgue con información imparcial lo que ocurre con el narcotráfico, sus secuelas e implicaciones en el largo tiempo. Así es razonable que se consolide la democracia y desaparezcan, cada vez más, sus perfiles desleales.

Con la llegada al poder del cocalero Evo Morales las cosas no han cambiado porque siguen apareciendo las mismas tendencias. Esta vez vistas del revés pues los cocaleros del Chapare y los Yungas utilizan la misma estrategia de los Estados Unidos: "la manipulación para mis amigos", es decir, para seguir reproduciendo la coca

por la bonanza económica en la economía rural, mientras que “la ley es para aplicársela a los enemigos”, o sea para los ingenuos que quieren un Estado de derecho y un orden político donde se cumplan las reglas y no se acoja al delito disfrazado de reivindicaciones restringidas.

La suma de callejones sin salida

Desde un comienzo los mayores perdedores, tanto de la imposición externa como de las acciones de hecho en el sindicalismo campesino, fueron los sucesivos gobiernos desde Hernán Siles (1983) hasta Evo Morales (2008). Los resultados en veinticinco años de lucha contra el narcotráfico han sido lamentables: quiebra de la reconversión productiva promovida por el desarrollo alternativo en productos como frutas y hortalizas, así como erradicación violenta y diálogos bajos chantaje (Mansilla, 1995); cada año, entre 1990 y 2001, se contabilizaron de ocho a diez enfrentamientos entre el ejército y los cocaleros, generalmente con muertes sangrientas por balas de guerra. Puede comprobarse, además, que cuanto mayor fue la represión e injerencia exterior para reducir los cocales, mayor ha sido la tendencia hacia una polarización e intransigencia de los actores en conflicto: gobierno y cocaleros.

La información sobre narcotráfico es tan abundante y permanente que la opinión pública tiende a replegarse hacia la indiferencia por saturación. Todas las noticias sobre violación a los derechos humanos, corrupción y acciones de protesta desde el Chapare o los Yungas, prácticamente provocaron que la tensión y los estados de emergencia en las zonas cocaleras sean un dato cotidiano y casi natural para la ciudadanía. Esto da lugar a una sociedad anómica que normalizó los patrones disruptivos como la economía del narcotráfico, así como el aprendizaje a sobrevivir junto a la militarización absoluta del trópico cochabambino, la expansión de cultivos en los Yungas y el norte del departamento de La Paz y las cada vez más numerosas incautaciones de pasta base de cocaína en la ciudad de El Alto boliviano.

Por otra parte, cuando tuvo lugar una mayor indulgencia de parte de los organismos gubernamentales para suavizar las disputas con el campesinado cocalero, mayores fueron también las presiones norteamericanas sobre el Estado, acosándolo con la certificación o *descertificación* internacional, documento primordial para la negociación de créditos ante la banca internacional, lo cual afecta directamente a los planes de desarrollo y a todo el circuito de la pobreza en Bolivia.

El complejo coca-cocaína creció tanto que es inviable destruirlo en el corto o mediano plazo, ni siquiera por la fuerza. Los diferentes *Zares* antidrogas estadounidenses critican a todos los gobiernos bolivianos, sentenciando que la erradicación de la hoja de coca fue un rotundo fracaso entre 1989 y 2001. A su vez, el ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, afirmó que los conflictos del Chapare c*arecían* de solución.

El problema del narcotráfico ya no descansa en si la coca es o no cocaína, o en si el desarrollo alternativo puede resucitar fortalecido. Todo gira en relación a una madeja que es una cabeza de medusa: intereses económicos y políticos de los sindicatos cocaleros, intereses de las instituciones que se benefician con la lucha antidrogas y paupérrimas políticas exteriores de diferentes gobiernos que no pueden controlar los imperativos estadounidenses. En la cabeza de medusa, todo es motivo de sospecha y no existe la posibilidad de construir distintos escenarios para el diálogo porque todo parece convertirse en un sórdido laberinto de piedra donde los ecos rebotan sin entendimiento.

En los procesos de producción, comercialización, utilización, consumo y erradicación de la coca participa una enorme cantidad y diversidad de actores sociales y de agentes económicos. Algunos están altamente organizados y su acción obedece a propósitos explícitamente predefinidos por un poder central como los gobiernos, en tanto que otros representan verdaderos poderes descentralizados en extremo y su acción resulta de decisiones individuales y no coordinadas entre sí, como es el caso de los comerciantes de coca y de insumos químicos, de los consumidores finales de coca y de cocaína en todas sus formas e incluso de los productores de pasta base (Laserna, 1993).

Al mismo tiempo, el aumento en la demanda de cocaína – se estima que unas 90 toneladas de cocaína anuales son demandadas sólo por Estados Unidos – que estimula la producción excedente de coca es un incentivo que vicia paralelamente al Estado y a las políticas de desarrollo alternativo pues la corrupción gubernamental siempre fue toda una industria para el ascenso político. El negocio está en todo flanco: mercados campesinos, comercio de drogas, asesorías especializadas y tráfico de influencias en altas esferas de decisión. Con estas condiciones es sumamente improbable que pueda surgir una solución adaptada a la ley y el orden. En el complejo coca-cocaína nadie expresa sus verdaderas intenciones y todos buscan aprovechar la situación.

Conclusiones: la democracia atenazada

Desde los escándalos del caso Huanchaca en 1986 cuando se descubrió un laboratorio de cocaína que involucraba a la Drug Enforcement Agency (DEA) y a dirigentes políticos bolivianos, las comisiones parlamentarias de derechos humanos y control de drogas son incapaces de proponer soluciones. Para el año 2008, la erradicación fue reducida de 11 mil hectáreas a sólo cinco mil, por lo cual el proceso de vigilancia habría ingresado en un statu quo y el Congreso hasta ahora no modificó la Ley 1008 de substanciales controladas. En la lucha contra el narcotráfico, el Parlamento ha sido, fue y será rebasado en sus atribuciones por la enorme estructura burocrática que construyó el Poder Ejecutivo con la Dirección de Bienes Incautados, el

Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, las Secretarías o Vice-ministerios de Defensa Social y de Coca (Roncken, 1998: 49-68).

Esto ocasiona que los líderes políticos del Congreso entre 1990 y 2008 no puedan hacer otra cosa que reaccionar siempre después de cualquier consecuencia. Para éstos, es imposible adelantarse a los hechos y prevenir (Cortez, 1992). Junto a las burocracias estatales se encuentran los funcionarios internacionales que, además de ser ejecutores y asesores de políticas, representan otro grupo de intereses que oscurecen aún más la estructura del complejo armazón entre la coca y cocaína.

Tanto los burócratas gubernamentales como internacionales lograron que sus *razones técnicas* se transformen en una *instancia suprema*, bloqueando la intervención política del Parlamento y evitando que otras organizaciones de la sociedad civil puedan generar un ambiente de concertación. En la práctica, la burocracia convirtió a los conflictos del Chapare y la interdicción en una búsqueda banal de estabilidad y seguridad económica (empleos, salarios y prestigio) como una forma de compensar los riesgos por poner las manos en el avispero.

En Bolivia, los procesos de interdicción al narcotráfico han estado franqueados por tres *supraestructuras* muy influyentes. Primero, las amenazas de descertificación con la consiguiente intervención de organismos financieros internacionales que condicionan enormemente a los gobiernos bolivianos en materia antidroga y asistencia económica. Segundo, y como consecuencia de tales amenazas, las presiones sin concesión por parte de la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de La Paz representan el tema más delicado en la agenda boliviana de relaciones exteriores. Tercero, la enorme red burocrática tejida por el propio gobierno boliviano hace muy difícil que algunos formuladores de políticas y altos dignatarios realmente estén a favor de terminar con el circuito coca-cocaína por una vía pacífica; dicha red burocrática sabe muy bien que es más fácil concentrar la mayor cantidad de ayuda económica gracias a la militarización y a un sobredimensionamiento de los objetivos de interdicción que desplazan y opacan el desarrollo alternativo permanentemente.

La presión que ejerce el gobierno estadounidense hacia Bolivia en materia de narcotráfico y sustitución de cultivos puede ser calificada como una política para favorecer una oposición sistemáticamente destructiva que va socavando el sistema político democrático, y fortaleciendo una profunda ambigüedad moral, sin referencia a procesos de justicia transparente y sin plantear otra estrategia que pretenda llevar el narcotráfico hacia una solución viable, promoviéndose más bien los rasgos de una nueva cultura imperial de amenaza permanente.

Si bien varios gobiernos bolivianos como los de Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer lograron cumplir con algunas metas significativas la erradicación forzosa de hojas de coca en Cochabamba, no se puede negar que antes de poner en marcha una estrategia concertada y plenamente boliviana, todo el proceso siempre estuvo

subordinado a objetivos militares y a la estrecha vigilancia política de los Estados Unidos. Se trata de una directa dependencia geopolítica. Esto se evidencia en varias visitas como por ejemplo la llegada del ex Zar antidrogas Barry McCaffrey quien en distintos informes al Departamento de Estado y a la oficina del ex Presidente Bill Clinton (15 y 22 de febrero, así como el 2 de marzo de 2000), realzó el compromiso político y militar de la democracia boliviana con la erradicación, sin expresar absolutamente nada sobre la necesidad de priorizar una verdadera política para la reconversión productiva de largo plazo en el Chapare y los Yungas (Cf. Youngers, 1997).

Es más, dichos informes sugieren articular el tenebroso y costoso Plan Colombia con una asistencia menor hacia Bolivia, Perú y Ecuador, aclarando que toda la estrategia está enmarcada dentro de los parámetros de la interdicción. Un eventual impulso económico que viabilice la posibilidad de desmilitarizar y pacificar el Chapare quedaba ausente, así como una alternativa para que Bolivia reciba mayor apoyo financiero en el mediano y largo plazo para implementar viables alternativas sustentables de la economía campesina. Por el buen trabajo de las acciones de erradicación forzosa no hubo en Bolivia, ni mayor compensación económica, ni el ofrecimiento de terminar con la militarización.

Lo único que se puede contabilizar a favor es la organización política del instrumento partidario que los cocaleros lograron llevar adelante con el MAS, pues su representación política se convirtió en una consecuencia de la democracia pluralista donde la sociedad boliviana dio asimismo la oportunidad para que Evo Morales ejerza como presidente de la república. Los cocaleros pasaron del activismo de resistencia en torno a la erradicación, al ejercicio del poder, por lo menos con su jefe máximo, aunque están pendientes los resultados de un presidente indígena, cocalero y figura de liderazgo nacional en Bolivia legitimada para reestructurar la economía y el Estado; sin embargo, las promesas de Morales para derogar la Ley 1008 no se cumplieron.

Por lo tanto, hoy en día cuando muchos líderes políticos y defensores de los derechos humanos afirman que “nunca habrá un final en la guerra contra la coca”, no se dan cuenta de que sus acciones gubernamentales o concepciones sobre las drogas muestran que los objetivos militares de interdicción echarán por la borda la pacificación del Chapare y la estabilización política que la democracia necesita. La militarización sólo acumuló reacciones políticas que fueron articuladas por el movimiento cocalero para dejar intactas las causas estructurales del circuito coca-cocaína.

Sin una desmilitarización total y definitiva de las zonas cocaleras, es más que imposible reorganizar el desarrollo alternativo, por lo que la guerra contra las drogas en Bolivia seguirá atada a rebrotes de violencia y a metas burocráticas que se hilvanan entre el Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Defensa Social, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, el Ministerio de

Desarrollo Rural, las estructuras policiales y un mercado internacional ilegal de tráfico de estupefacientes. Esta madeja burocrática vive y se alimenta desde hace veinticinco años, solamente de alarmas sobre el narcotráfico, acciones de hecho en el Chapare y movilizaciones en los Yungas que tampoco han sido modificadas por el gobierno del cocalero Evo Morales.

Cuando Bolivia demanda en las reuniones de Naciones Unidas mayor cooperación de la comunidad internacional para la apertura de mercados e inversiones para generar alternativas en el Chapare, nadie se preocupa de aclarar que cualquier estrategia de mercado necesita al mismo tiempo de estabilidad y paz para un eficaz comportamiento de tales inversiones o proyectos alternativos hacia el futuro. Por supuesto que diferentes Ministros de Gobierno también insisten en que las misiones militares todavía tienen mucho por hacer en el Chapare y los Yungas; por lo tanto, es un delirio solicitar mayor compromiso multilateral para el desarrollo alternativo cuando las Naciones Unidas y la Unión Europea saben por demás que la interdicción y el narcotráfico en la región andina son un *espacio conquistado* por la política norteamericana antidrogas. Es decir, existe una predeterminada intención para dejar que las cosas continúen como están.

Nadie se animará a poner las manos al fuego, ni por ningún Presidente boliviano, ni por los magros éxitos de erradicación de coca, ni por una mayor asistencia económica porque la violencia latente e inestabilidad atraviesan el corazón de la lucha antidroga en Bolivia. El éxito erradicador tiende a ser un arma de doble filo, pues no ha conseguido que los Estados Unidos reconozcan el esfuerzo boliviano para transitar de la erradicación hacia un tranquilo desarrollo económico y, por más que el Ministerio de Desarrollo Rural tenga una serie de planes respecto al Chapare para producir alimentos, frutas y madera, la burocracia organizada en torno a las drogas se apegará más a las metas de interdicción.

Las pocas alternativas que existen radican en recomponer y fortalecer la voluntad política del Parlamento para pacificar el Chapare y fiscalizar, sobre todo, el respeto a los derechos humanos de campesinos y ejército. En el ámbito del Poder Ejecutivo, se hace imprescindible desburocratizar el circuito coca-cocaína, además de desarrollar una ingeniosa política exterior con los Estados Unidos para ablandar presiones sin compromisos arriesgados, por ejemplo con preferencias arancelarias para todo tipo de exportaciones de Bolivia al país del norte; por último, en el ámbito de la sociedad civil, es fundamental estimular un clima de opinión que prepare el terreno para un apoyo a la legalización de drogas, inclusive en el ámbito internacional. Solamente así podría reducirse la violencia para transitar a una economía legal de la hoja de coca.

Los verdaderos derrotados en este juego perverso son la sociedad civil y el propio Estado democrático, puesto que, a mayor represión e injerencia externa para la reducción de cocales, mayor será la tendencia hacia una polarización de los actores en conflicto y de la propia conciencia ciudadana en la sociedad; mientras que cuando

exista mayor indulgencia de parte de los organismos gubernamentales para suavizar las disputas con el campesinado cocalero, mayor amenaza estadounidense se cierne sobre la cabeza del Estado mediante el acoso de la políticas de *descertificación*: bloqueo internacional y sanciones económicas por no reducir las plantaciones de coca excedentes. Esta situación revela la vulnerabilidad del país y de cualquier gobierno boliviano, liquidando también la intención de cimentar nuestra democracia representativa.

En los conflictos del Chapare, uno de los problemas con profundas implicaciones para la democracia en Bolivia, se refiere a que el movimiento social cocalero no busca su adscripción racional dentro del sistema político, ni tampoco intenta luchar para modernizarlo en función de una estructura social y política de transformaciones culturales y sociales para todo el país, pues prefiere que la articulación de sus intereses restringidos al negocio del mercado de la coca y cualquier participación en asuntos públicos sea mediante el trabajo en los sindicatos campesinos, donde los cocales son una cuestión de vida o muerte, junto con acciones de presión y violencia como modos de vida porque es imposible guardar equilibrios con la economía del narcotráfico. No; la libertad y las promesas de revolución democrática y cultural con un presidente indígena como Evo Morales deberán favorecer resultados claros para modificar la Ley 1008 y reforzar el combate a las drogas con una estrategia internacional en contra de la delincuencia empresarial, reincorporando a los campesinos de coca en nuevos escenarios productivos de largo plazo.

Nuestra lucha contra el narcotráfico sigue siendo definida como incontrolable corrupción de políticos, jueces, banqueros, militares y campesinos, forzando la visión de una sociedad que está acostumbrada a la anomia y el caos. Como efecto perverso, el MAS en el gobierno tampoco cambió la política antidrogas en Bolivia y no venció la ingenuidad de considerarse un poder duro capaz de enfrentarse a la intervención estadounidense. En el fondo, el discurso cocalero anti-imperialista sigue siendo una retórica porque la administración del Presidente Morales continúa aceptando una política exterior antidrogas diseñada por los Estados Unidos. La representación parlamentaria del MAS solamente aboga por la expulsión nominal de los organismos americanos de interdicción como la DEA, sin encarnar a una fuerza congresal con los medios efectivos para desarrollar otra política de lucha antinarcóticos.

Finalmente, la oposición de Evo Morales al neoliberalismo y sus actitudes vacilantes ante el narcotráfico, hacen del MAS un partido semi-leal a la democracia de coaliciones y equilibrios gobernables, precipitando un peligroso aislamiento económico que se reproduce hábilmente por medio de lógicas de la negación y que constituyen el caldo de cultivo para miles de posiciones apocalípticas; por ejemplo, el 26 y 27 de junio de 2008 los campesinos cocaleros decidieron expulsar de los Yungas del departamento de La Paz a la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), generando un conflicto diplomático y al mismo tiempo acusando al embajador Philip Goldberg de utilizar los fondos del desarrollo para

acciones de sabotaje en contra del gobierno de Morales; sin embargo, este tipo de incidentes son una especie de carta común desde los años noventa. Lo que sí es fundamental debatir gira alrededor de la gran red de *intereses institucionales y burocráticos* que se han reproducido desordenadamente con motivo del discurso de guerra contra las drogas, desarrollo alternativo e interdicción.

Los discursos de confrontación directa, ruptura, presión violenta y las estrategias que los sustentan han fracasado históricamente con pruebas contundentes: Evo Morales fue elegido presidente de Bolivia en el año 2005 demostrando que la guerra de baja intensidad contra las drogas en Bolivia podía tener efectos contrarios a lo previsto por los intereses de Estados Unidos. Asimismo, el combate a la pobreza campesina no es un eje de la discusión ni prioridad para el Chapare y los Yungas porque estas zonas son relativamente más prósperas en comparación con la pobreza de los departamentos de Potosí, Oruro y Chuquisaca. La economía del circuito coca-cocaína ha generado ingresos para los productores cocaleros como para evitar su deterioro y destino que los mantenga en la pobreza, pero no modernizó ni abrió nuevos rumbos para el desarrollo rural.

La verdadera contradicción de este tipo de problemáticas complejas radica en la "construcción burocrática de la realidad", donde las Naciones Unidas, los organismos de cooperación para el desarrollo, organizaciones no gubernamentales, sindicatos campesinos y el Ministerio de Gobierno en Bolivia, se adaptaron a un verdadero *estilo de vida* para alarmar a la opinión pública nacional e internacional sobre las condiciones destructivas del circuito coca-cocaína. Esto será difícil de romper por lo complicado que es combatir los prejuicios y las ilusiones de aquellos actores sociales, políticos e institucionales que se benefician de múltiples formas al calor de estos conflictos.

Bibliografía

Arrieta, Carlos; Orjuela, Luis J.; Sarmiento P. Eduardo y Tokatlian, Juan. (1991) *Narcotráfico en Colombia: dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales*, Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Barrios Morón, Raúl. (1989) *Bolivia y Estados Unidos. Democracia, derechos humanos y narcotráfico (1980-1982)*, La Paz: FLACSO-Hisbol.

Cortez, Roger H. (1992) *La guerra de la coca. Una sombra sobe los Andes*, La Paz: FLACSO-CID.

Gamarra, Eduardo A. (1994) *Entre la droga y la democracia*, La Paz: ILDIS.

Laserna, Roberto. (1993) *Las drogas y el ajuste en Bolivia. Economía clandestina y*

políticas públicas, La Paz: CEDLA, Programa de Ajuste Estructural, Documento de Trabajo No. 7.

Mansilla, H. C. F. y Blanes, José. (1994) *La percepción social y los hechos reales del complejo coca-cocaína*, La Paz: SEAMOS.

Mansilla, H. C. F. (1995) *Las élites bolivianas frente a la legalización de las drogas. El futuro entre el exceso de permisividad y la reglamentación convencional*, La Paz: SEAMOS.

Merrill, Collet. (1989) *The cocaine connection: drug trafficking and Inter-American relations*, New York: Foreign Policy Association.

Quiroga, José Antonio. (1990) *Coca-cocaína, una vision boliviana*, La Paz: AIPE-PROCOM-CEDLA-CID.

Roncken, Theo. "De narcoaviones y protección policial en Bolivia". En: Martín Jelsma (ed.) Drogas, poder y derechos humanos en América Latina, Quito: Abyayala, 1998.

Waldmann, Peter. (2006) *El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina*, Bogotá: Iberoamericana, Vervuert.

Wilson, Suzanne and Zambrano, Marta. (1994) "Cocaine, commodity chains, and drug politics: a transnacional approach"; in: Gereffi and Korzeniewicz, Miguel. *Commodity chains and global capitalism*, Praeger Publishers: Wesport.

Youngers, Coletta. (1997) "La guerra contra las drogas: Estados Unidos sigue un camino equivocado"; en: Jelsma, Martin. *Daño colateral de la guerra antidrogas*, Cochabamba: CEDIB, Acción Andina.